

INSTITUTO DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Director: Académico Adalberto Rodríguez Giavarini

ALGUNOS DESARROLLOS EN 2019 SOBRE EL CONFLICTO ISRAELÍ-PALESTINO

*Por el embajador Atilio Molteni,
Instituto de Política Internacional*

ALGUNOS DESARROLLOS EN 2019 SOBRE EL CONFLICTO ISRAELÍ-PALESTINO

Por el embajador Atilio N. MOLTENI

El estatus de Jerusalén

La Historia siempre ayuda a entender el valor de los hechos. Como es público, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y difundirse urbi et orbi los horrores del Holocausto, comenzó a fortalecerse la gesta iniciada por Theodor Herzl, en 1896, orientada a crear las condiciones para establecer un Estado Judío.

Tal idea fue avalada por el anuncio británico de 1947, de que abandonaría su mandato sobre Palestina y endosaría el problema a la ONU. Como consecuencia de ello, el 31 de agosto del mismo año, el Comité Especial sobre Palestina (UNSCOP) propuso que la Asamblea General finalizara dicho mandato, otorgara la independencia a Palestina y que su territorio se dividiera entre un Estado Árabe y otro Estado Judío, los que deberían estar económicamente vinculados, en tanto existió acuerdo para que Jerusalén deviniera en fideicomiso de la ONU. El 29 de noviembre la Asamblea General adoptó el conjunto de estos enfoques mediante la Resolución 181 (II) “sobre el futuro Gobierno de Palestina” (Argentina se abstuvo en la votación).

Si bien la mayoría de sus líderes cuestionaron la idea de un Estado Árabe y la exclusión de Jerusalén, la Agencia Judía aprobó el aludido plan de partición. Ben-Gurion logró ese resultado alegando que todo ello representaba un endoso internacional para el Estado Judío y siguió adelante. En cambio, la población árabe de Palestina y los Estados árabes rechazaron y denunciaron estas ideas, tesis que significó primero un conflicto local y luego el puntapié inicial para la Guerra de 1948. El enfrentamiento entre sionistas y palestinos en busca de la soberanía del mismo territorio consiste, en última instancia, en el enfrentamiento de dos proyectos nacionales contradictorios que interpretan su Historia de manera opuesta, lo que supone un claro rechazo a la posibilidad de coexistir en paz.

La creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, fue consecuencia de la acción de un grupo de líderes seculares y socialistas, encabezados por David Ben-Gurion, el primero que fue designado para ocupar el cargo de Primer Ministro. Esos grupos construyeron, con gran esfuerzo, una democracia parlamentaria y un Estado poderoso y secular, rodeado de Estados árabes. Pudieron imponer sus objetivos en incontables enfrentamientos, a través de acciones militares y políticas muy bien desarrolladas. También es un hecho que Estados Unidos trató de desempeñar desde los años sesenta el papel de mediador imparcial entre israelíes y palestinos, sin reconocer los reclamos de ninguna de las partes.

Jerusalén representa uno de los problemas centrales y es una ciudad que resume, en sí misma, las demás facetas del conflicto. Es un símbolo no sólo para israelíes y palestinos, sino también para gran parte de la humanidad. Constituye un problema político, al que se agrega su peso histórico y la relevancia que le otorgan las tres grandes religiones monoteístas: la judía, la cristiana y la musulmana.

La ciudad estuvo dividida entre Israel y Jordania desde 1948 hasta la Guerra de 1967, cuando Israel la ocupó totalmente y extendió unilateralmente sus límites. El 30 de julio de 1980, mediante la “Ley de Jerusalén” unificó sus partes occidental y oriental, proclamándola como su capital eterna e indivisible. Sucesivos Gobiernos israelíes han abogado por una Jerusalén unida, integrando a la población árabe, teniendo en cuenta, entre

otras razones, al deterioro de la seguridad y el escaso porcentaje de los israelíes judíos que están a favor de ceder partes de Jerusalén Oriental en un acuerdo de paz.

En cambio, el 26 de diciembre de 2000 -al concluir una negociación sobre los temas centrales de la controversia-, el presidente Bill Clinton propuso que las áreas árabes fueran palestinas y que las judías pertenecieran a Israel. Los palestinos sostienen que deben recuperar Jerusalén Oriental, incluyendo la Ciudad Antigua, a la que consideran territorio ocupado y, especialmente, el Monte del Templo -Haram Al-Sharif-. Si se acepta el principio de que habrá dos Estados, conviviendo lado a lado, con un límite acordado, la ciudad podría ser dividida en dos ciudades: Jerusalén Oriental/Al Quds, como capital del Estado Palestino y Jerusalén Occidental, capital del Estado de Israel.

Aunque después de ser electo Donald Trump envió un mensaje al Gobierno israelí donde anunciaba su intención de desempeñar un papel significativo para alcanzar un acuerdo sobre el estatus final entre Israel y Palestina como el “acuerdo último”, y en negociaciones directas entre las partes, hasta el momento no avanzó por ese camino. El 6 de diciembre de 2017, y cumpliendo con una de sus declaraciones de campaña reconoció a Jerusalén como capital de Israel, rompiendo con la condición de mediador imparcial de Estados Unidos y sin exigir ninguna contrapartida. Agregó que su decisión sólo habría de significar el reconocimiento de una realidad.

Muchos vieron en esa declaración la idea de aceptar a soberanía de Israel sobre toda Jerusalén, lo que de hecho no responde a lo que dijo el presidente, pero tal conclusión se debe a que Trump no cuestiona las declaraciones israelíes ni la ampliación de las construcciones en los territorios ocupados. Los palestinos temen que estos movimientos constituyan un precedente. En ese contexto, la situación es crítica por el hecho de que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu mantiene con Trump una relación distinta a la que condujo con su antecesor y, al mismo tiempo, un entendimiento muy amplio, reflejado por ejemplo en la denuncia

del Acuerdo Nuclear con Irán y en otros actos concretos en favor de Israel.

Los acuerdos de Oslo y la promesa incumplida

El 13 de setiembre de 2019 se cumplieron veinticinco años de uno de los grandes hitos de la política internacional. Se trata del momento en el que Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, acogía en Washington a los que estamparon la firma en la “Declaración de Principios”, el primer compromiso formal entre Israel y la Organización de la Liberación Palestina (la OLP), hasta entonces considerada una banda terrorista. El texto se preparó con el objetivo de montar un proceso de creciente convergencia y convivencia entre ambos pueblos. Tal ceremonia permitió registrar el histórico apretón de manos entre el Primer Ministro laborista de Israel, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat basada en la idea, de “territorios por paz”. Tras ese salto conceptual, y como resultado de las conversaciones secretas previas que se realizaron en Noruega entre los representantes de ambas partes, vio la luz lo que se identificó como el Acuerdo de Oslo, reflejado en la aludida declaración.

Era el momento en que Israel miraba la autonomía palestina como una etapa intermedia hacia un acuerdo final, donde ese pueblo debía quedar representado por la OLP. La secuencia sólo fue posible merced a la decisión de Arafat (entonces líder de la facción nacionalista y secular Al Fatah), quien en 1988 aceptó la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la solución que se conoce como “Los Dos Estados”. La existencia del denominado Proceso de Oslo permitió establecer un sistema de limitado autogobierno ejercido por la Autoridad Nacional Palestina (ANP); el mutuo reconocimiento entre Israel y la OLP, un retiro parcial israelí de parte de los territorios de la Ribera Occidental y la fijación de un plazo para comenzar las negociaciones de las cuestiones de fondo, pero que se debería concretar un comprensivo acuerdo de paz en 1999. Arafat tuvo la audacia de presentar el paquete a su pueblo como un resultado histórico, a pesar de que el

texto no adjudicaba a Palestina la condición de Estado ni su independencia.

Tiempo después, el proceso derivó en los acuerdos que se denominaron “Oslo II”, concebidos para organizar los territorios y el Gobierno palestino involucrados en este proyecto que, sin devenir en un Estado, podía quedar organizado como tal y ser reconocido por muchos países (siempre bajo el escudo de la indefinición de fronteras y soberanía). Con esa secuencia, el 28 de noviembre de 1995 resultó posible suscribir los nuevos textos en Washington y hacerlo en el mismo año en que Arafat lograba ser electo presidente de la ANP. Los integrantes de la OLP que llegaron de Túnez con su nuevo líder consiguieron desplazar a la dirigencia local del movimiento palestino, quienes habían encabezado la primera intifada y darse a la tarea de crear nuevas instituciones.

Pero el 4 de noviembre de 1995, el asesinato de Yitzhak Rabin, materializado por un fanático judío ultraortodoxo, originó una profunda crisis tanto en el país como en el proceso de negociación. Ante la emergencia lo reemplazó temporariamente Shimon Peres, que convocó a elecciones en mayo de 1996, pero a consecuencia de diversos ataques terroristas fue imprevistamente derrotado por Benjamín Netanyahu, líder del derechista partido Likud. Este se convirtió en el Primer Ministro más joven en la historia del Estado hebreo y gobernó hasta el año 2000. Tras un cierto interregno, volvió a instalarse en el poder en 2009, puesto en el que sigue hasta el presente con el apoyo de una coalición de extrema derecha, que incluye partidos religiosos. Netanyahu alternó desde entonces diferentes aproximaciones políticas, siempre bajo el paraguas de una fórmula concebida para sustituir la idea “territorios por paz” con la de “territorios para la seguridad”.

La accidental demora en la implementación de los acuerdos significó, para los laboristas (que creían en un acuerdo negociado), y para el país, el fracaso del Proceso de Oslo. Sin embargo, esa no fue la única dificultad. Otras fuerzas pensaron que imponía dificultades originales, ya que fue concebido buscando un “socio” para la paz cuando ambas partes siempre discreparon en los temas centrales. En otras palabras, señalaban que los protagonistas de

Oslo estaban listos para negociar, pero no para resolver los conflictos. También nunca existió un mecanismo de verificación externo, para auditar las implementaciones de tales objetivos. Sobre todo, porque los palestinos imaginaron que el proceso habría de terminar con los asentamientos israelíes, cosa que no sucedió. Al contrario, las ocupaciones territoriales se ampliaron en forma constante, y su estatus fue legalmente reconocido por el Gobierno de Israel.

Tampoco Washington demostró tener el reloj en hora. Clinton se involucró recién en julio de 2000, al final de segundo mandato, en las negociaciones, intentando llegar en Camp David al acuerdo final con el presidente Arafat y el Primer Ministro laborista, Ehud Barak. Ahí el objetivo fue, por primera vez, establecer un Estado palestino viable. Pero, la demanda de otorgar el derecho al retorno de los refugiados, y el estatus de la ciudad de Jerusalén, llevó al fracaso tan ambicioso proyecto.

Varios de los protagonistas optaron por responsabilizar a Arafat por no haber tenido la visión necesaria para alcanzar la paz. En diciembre de 2000, Clinton presentó sus “parámetros” como un paquete de negociación que debía ser aceptado por las partes como base para un Tratado de Paz, lo que no tuvo buen eco. Y a pesar de que muchos de sus contenidos aún son válidos debido al interés de sus fórmulas para la solución de los temas centrales, las cosas no fueron muy lejos. Posteriormente, George W. Bush y Barack Obama trataron de ayudar a las partes a alcanzar la paz utilizando esos precedentes y la noción de presentar a Washington como un “intermediario honesto”, un enfoque que no alcanzó para domesticar la creciente complejidad de los acontecimientos políticos que surgieron en todo el frente del conflicto y en el conjunto de la región.

Desde una perspectiva actual, la ANP está en una crisis profunda por no haber podido constituir un Estado, una situación en la que tiene una responsabilidad directa. Los ataques terroristas y la segunda intifada que se desató a partir del 2000, y prosiguió por cuatro años, llevó a gran parte de los israelíes a dejar atrás su interés en aceptar los compromisos de este proceso. A la vez, el control que ejerce el Grupo Hamás de la Franja de Gaza desde

2007 hasta el presente (una fuerza islamista que se opone al proceso de Oslo y a la existencia de Israel), dividió a los palestinos. El presidente Mahmoud Abbas, quien fue electo como sucesor de Arafat en 2005, nunca pudo ser reelecto en esa categoría tras concluir su mandato y gobierna de hecho por decreto. Por otra parte, la ANP cambió de fisonomía y se volvió más autocrática, corrupta y represiva con sus habitantes, un cuadro en extremo complejo ya que Abbas no tiene buena salud ni sucesor designado. A pesar de ello, la cooperación con Israel en temas de control de seguridad es ahora bastante efectiva y beneficiosa para ambas partes.

En semejante contexto, y en virtud de sus innegables talentos políticos, Netanyahu devino en el líder indiscutido de su país, donde las ideas que aceptan la autodeterminación exclusivamente para los judíos ya tienen vigencia legal (el judaísmo se convirtió en la base del Estado y en la religión oficial) y la negociación efectiva del proceso de paz quedó muy atrás. Por otro lado, la sociedad israelí se fue transformando debido a la influencia de los inmigrantes venidos de la URSS, y la mayor gravitación de los judíos ortodoxos, mientras los palestinos israelíes quedaron en una situación de dependencia al lesionarse el carácter secular de Israel, no obstante que sus partidos políticos tienen representación en la Knesset, pero nunca han integrado un Gobierno y sus derechos individuales están condicionados por las características propias del sistema. El Primer Ministro sigue una política de hechos consumados al amparo de una situación regional que lo favorece y en virtud de los múltiples, graves y sensibles, conflictos existentes. Puede decirse que existe una crisis de identidad del país que no tiene miras de resolverse.

En estos días, y aunque el presidente Trump se comprometió a alcanzar “el acuerdo del siglo”, hasta ahora no se conoce su plan y, quizás por los comentarios negativos de los palestinos y algunos de los gobiernos árabes, su destape no parece inminente. Además, el intempestivo reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital del Estado de Israel y el traslado a esa ciudad de su embajada, más la suspensión tanto de sus contribuciones a la UNRWA (agencia de la ONU para los

refugiados palestinos) como de la desacreditación de los representantes de la ANP en Washington, a lo que se sumó su discurso ante la Asamblea General del 25 de septiembre de 2019, donde afirmó que no quería ser rehén de viejos dogmas e ideologías desacreditadas en la región, licúan cada vez más los respaldos para la fórmula de “Los Dos Estados”.

El acuerdo del siglo

El 11 de junio de 2019, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció un discurso ante los delegados de 26 países que concurren al Foro Global del American Jewish Committee, celebrado por primera vez en Jerusalén al cumplirse 112 años de su existencia. Ahí sostuvo que las relaciones de Israel con los países árabes estaban mejorando más de lo imaginable y sugirió que se propone ayudar a lograr la paz con los palestinos.

Días después, los delegados del presidente Donald Trump, su yerno Jared Kushner y Janson Greenblatt, su asistente especial para las negociaciones internacionales, comenzaron a recorrer Oriente Medio para presentar un plan que él considera como el “Acuerdo del Siglo”. El documento intentaría formular soluciones para los temas principales de la disputa sobre el estatus final: fronteras, seguridad, refugiados y Jerusalén.

Varios de los predecesores de Trump en la Casa Blanca ya habían intentado mediar en uno de los problemas internacionales que hasta ahora demostró ser insoluble. Barack Obama lanzó una iniciativa para resolverlo en nueve meses. A pesar de varios viajes a la región del entonces secretario de Estado, John Kerry, para motorizar a las partes, no tuvo éxito, pues no estaban políticamente preparadas para suscribir un acuerdo de paz. En diciembre de 2016, después de la elección de Trump, el Gobierno de Obama se abstuvo (pero no vetó) la resolución 2.334 del Consejo de Seguridad, que reafirma la ilegalidad de los asentamientos israelíes, decisión que fue muy criticada por el presidente electo y por Netanyahu.

Hoy, en cambio, existe un mayor entendimiento entre Estados Unidos, Israel y algunos de los países sunnitas del Golfo, como Arabia Saudita y los Estados Árabes Unidos, motorizados por su oposición a Irán, a quien consideran el peligro común. Para alcanzar un resultado positivo entre israelíes y palestinos, es necesario superar problemas que surgieron en las negociaciones previas, y otros que caracterizan a la situación política de las partes.

Entre los primeros, el tema territorial ya pudo estar resuelto en 2007, cuando el entonces primer ministro israelí, Ehud Olmert, ofreció la casi totalidad de lo pretendido por los palestinos, y un intercambio de territorios para asimilar a Israel los grandes bloques de asentamientos ubicados sobre la línea de demarcación. También propuso que Jerusalén Oriental fuera la capital del nuevo Estado. Pero el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, no lo aceptó por la relevancia que se daba a los restantes temas de un acuerdo final. Hoy la situación de Jerusalén se complicó, por el traslado de la Embajada norteamericana de Tel Aviv a esa ciudad.

Como ya se comentó, la ANP fue creada por los denominados “Acuerdos de Oslo”, que comenzaron con la “Declaración de Principios” firmada el 13 de septiembre de 1993 en Washington, el primer compromiso formal entre el Estado judío y la Organización de Liberación de Palestina (OLP). En diversos acuerdos luego se estableció un sistema de autogobierno palestino en Ramallah y un plazo para negociar las cuestiones de fondo, que se fue extendiendo hasta el presente.

En cuanto a los refugiados, los palestinos sostienen que tienen el derecho a regresar a sus hogares originales en el territorio israelí, de los que se fugaron desde la guerra de 1948 y ello se transmitió a sus sucesores. La posición de Israel es que, con la creación del nuevo Estado Palestino, los que se encuentren en tal situación podrán integrarse a él. En cambio, si se les permite regresar a su territorio, el eventual “derecho al retorno” afectaría las bases de un Estado judío democrático, ya que los palestinos los superarían en número y se volverían una amenaza demográfica. De allí la posición que defiende Netanyahu, de que éstos deben

reconocer a Israel como tal y cualquier acuerdo tendría que incluir una cláusula que acepte el fin de todos los conflictos entre las partes. En cuanto a la seguridad, la pretensión de Israel es que los palestinos admitan un Estado desmilitarizado, el control israelí del valle del Río Jordán y de su espacio aéreo.

Pero el principal negociador palestino, que es Saeb Erekat, ya ha dicho que la actual Administración norteamericana está haciendo campaña por Israel y no tiene en cuenta las aspiraciones palestinas y sus derechos humanos, que se reflejaron en las negociaciones anteriores, y en el que tácitamente supone que la paz tiene tanto valor que éstos deberían aceptar compromisos que implican la renuncia de sus derechos políticos. En síntesis, no cree que sea viable. De allí la relevancia que Israel otorga a los Estados árabes mencionados, para lograr que la ANP acepte las negociaciones y reconozca que Estados Unidos es el principal interlocutor para alcanzar soluciones realistas y comprensivas, a pesar de que es el principal aliado de Israel desde los años sesenta.

La situación de los palestinos se agravó cuando Hamas ganó las elecciones legislativas del 25 de enero de 2006 y desalojó a la ANP de Gaza, con lo que las bases del conflicto israelí palestino dieron un giro total. Con ello se fortaleció un protagonista que incorporó al conflicto el componente desestabilizador de la religión, algo que contrasta con el laicismo de Abbas y sus seguidores. La respuesta de Israel fue acentuar el aislamiento de la Franja y luego hacer tres grandes operaciones militares como respuesta a las acciones terroristas de Hamas.

En enero de 2019 comenzaron demostraciones masivas en la frontera de Gaza, que fueron motorizadas por la crisis humanitaria que existe allí. Una interpretación es que los dirigentes de Hamas, que siempre agitan las banderas de la resistencia, buscaron evadir su responsabilidad y volcarla hacia Israel a través de que sus habitantes rompieran las barreras y volvieran al lugar de sus antepasados, mientras se proponía utilizar internacionalmente la reacción israelí como prueba de su responsabilidad. En cambio, Netanyahu supone que la crisis es consecuencia de que Hamas (y la Jihad Islámica) utiliza el dinero para construir túneles y otras acciones terroristas continuas, lo que acentúa los problemas de la

población por las restricciones al acceso a Gaza de una serie de elementos. Además, las fuerzas israelíes responden de inmediato a estos actos con consecuencias colaterales, mientras existe (como en casos anteriores) la posibilidad una nueva operación militar masiva.

Como consecuencia de todo esto, el plan del presidente Trump, una vez que se formalice, deberá enfrentar una situación en la que israelíes y palestinos construyeron relatos totalmente diversos de sus argumentos, los que son inherentes a su ideología, religión y experiencia, forjados en muchos años de conflicto, lo que obviamente dificulta el lograr la paz. Al mirar los fracasos del pasado, ninguno de ellos parece tener demasiada fe en un proceso diplomático.

El 25 y 26 de junio de 2019 tuvo lugar en Manama, Bahrein la presentación del Plan denominado “Paz para la Prosperidad”, que es el componente económico del acuerdo del siglo del presidente Trump. Estuvo a cargo de su yerno y asesor, Jared Kushner ante un auditorio que incluyó a los presidentes del Banco Mundial y del FMI, representantes del país anfitrión y de Egipto, Arabia Saudita, Jordania y Egipto, otras personalidades, -como el ex primer ministro británico Tony Blair- y 300 hombres de negocios y periodistas occidentales y de la región, pero sin una presencia oficial de Israel ni de Palestina.

En Ramala se opusieron tenazmente al Plan y lo boicotearon, afirmando que solo sirve para impedir una solución política, al ofrecer una ilusión de prosperidad a cambio de aceptar una perpetua cautividad. Por su parte, el Gobierno de Israel no fue invitado ante la reticencia de algunos de los países concurrentes, que condicionaron el envío de sus delegaciones a esta decisión.

La idea central del Plan es facilitar más de 50.000 millones de dólares en inversiones a través de diversos esquemas financieros en la región durante el plazo de diez años, cuyos objetivos fundamentales son duplicar el PNB de los palestinos, crear un millón de nuevos puestos de trabajo, reducir el desempleo a cifras de un sólo dígito y disminuir en un 50% el porcentaje de personas

debajo del índice de pobreza. La transformación de Palestina tendría por objeto mejorar su economía, imitando el ejemplo de los países que han creado un clima favorable a los negocios. En síntesis, el equivalente de un Plan Marshall para atraer por medio de incentivos económicos al pueblo palestino por encima de su dirigencia y atraerlo a una negociación.

Los palestinos son 12.400.000 en el mundo, de los cuales 4.800.000 viven en la Margen Occidental del Río Jordán y Gaza, mientras 1.500.000 son ciudadanos israelíes, donde gozan de un estatus económico satisfactorio. Además, cerca de 5,400.000 millones de palestinos tienen la condición de refugiados en los territorios palestinos y en Jordania, Líbano y Siria, en donde la mayoría viven en campamentos en lo que se pensó era una situación temporal pero que existe desde 1947, como consecuencia de los enfrentamientos sangrientos bajo el mandato británico. En ellos ahora viven sus descendientes, bajo la protección y ayuda económica de la “Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina” (UNWRA).

Mientras la Administración Palestina -AP, creada en 1994 por los Acuerdos de Oslo- y presidida por Mahmoud Abbas (procedente de un movimiento secular como Fatah), controla parte de la Margen Occidental, desde 2007 Hamas lo hace en la Franja de Gaza. Esta es una organización islamista radical y rama sunnita de los Hermanos Musulmanes, que niega la existencia de Israel. Agitando las banderas de la resistencia se ha enfrentado regularmente con ella, motivando tres grandes operaciones militares israelíes sobre dicho territorio para condicionar sus acciones y los de la Jihad Islámica, que es aún más extrema y con vínculos con Irán. Allí existe una situación humanitaria dramática y no se vislumbra la posibilidad de un cese del fuego a largo plazo.

Las Administraciones norteamericanas buscaron con mayor o menor intensidad una mediación entre las partes y apoyaron institucionalmente a la AP, sin lesionar su relación estratégica con Israel. En cambio, el presidente Trump desarrolló una serie de acciones que afectaron sus contactos con Abbas, pues en diciembre

de 2017 reconoció a Jerusalén como capitán de Israel, trasladó su Embajada a esta ciudad, redujo la ayuda bilateral a los palestinos, concluyó con sus contribuciones a los refugiados de UNRWA y cerró la representación de la OLP en Washington. Por otro lado, al reconocer los derechos israelíes a las Alturas del Golán en perjuicio de Siria, facilitó la argumentación israelí que busca la anexión de los asentamientos.

Por otro lado, la presentación de su plan de paz sufrió postergaciones debido a que las elecciones israelitas del 17 de septiembre de 2019 (y las que las precedieron en abril) no dieron lugar a la constitución de un nuevo Gobierno. Los palestinos argumentan que las propuestas diplomáticas norteamericanas tienden a priorizar los objetivos del Gobierno de Netanyahu, mientras ha logrado entendimientos con el presidente Trump, y lo impulsó a sostener una presión constante sobre los ayatolas. El resultado fue la actual crisis del Golfo Pérsico, donde los riegos son importantes pues los iraníes no aceptaron hasta ahora negociar con Estados Unidos, y posiblemente esperen a una nueva Administración, que podría ser el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, cuando podrían proponer, quizás, cambios menores a lo acordado en 2015 con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, pero también están pendientes de solución los problemas relativos a su capacidad misilística y su actividad regional.

Por otra parte, existen cinco problemas a resolver entre israelíes y palestinos en las “Negociaciones sobre un Estatus Permanente”: fronteras (donde ya existe cierto entendimiento), asentamientos, Jerusalén, refugiados (para Israel la creación del Estado Palestino es la solución de este tema) y seguridad. Una cuestión fundamental, es la precondition israelí que se reconozca el carácter judío de su Estado, lo que es rechazado por los palestinos. Esta cuestión se vincula con el reconocimiento de los judíos como pueblo en un territorio propio, es decir el derecho de Israel de existir como Estado judío independiente.

EL PRIMER MINISTRO NETANYAHU CON GRANDES PROBLEMAS JUDICIALES

El día 21 de noviembre de 2019, el Primer Ministro Netanyahu fue imputado por el Procurador General de Israel, Avichai Mandelblit de ser responsable de fraude, soborno y abuso de derecho. Esta situación no tiene precedentes, pues es el primer líder israelí en enfrentar una grave situación judicial en el ejercicio de su cargo. Esta acusación afecta a un escenario político caracterizado por reiterados fracasos, tanto de su Partido de derecha Likud, como del opositor de centro izquierda Azul y Blanco (los colores nacionales), conducido por el exlíder de la Fuerzas de Defensa Benny Gantz, pues no pudieron formar una colación de Gobierno con diferentes facciones, después de las elecciones generales de abril y septiembre, lo que hace posible una nueva convocatoria electoral. Si esto ocurre Netanyahu va a estar debilitado por el proceso judicial en marcha, salvo que consiga la solidaridad inquebrantable de sus partidarios y un apoyo que le permita al Likud mantener o ampliar sus bancas parlamentarias. Cabe destacar que en el sistema político tiene preponderancia los Partidos pequeños, por lo cual los de mayor caudal electoral no pueden alcanzar una mayoría por sí solos, y el Gobierno debe formarse a través de una negociación que implica concesiones de puestos ministeriales y de un acuerdo acerca del programa a desarrollar.

La sospecha de haber cometido delitos ya fue un factor importante para que no obtuviera en las dos ocasiones anteriores los 61 votos parlamentarios en la Knesset, mayoría que se considera necesaria para el normal desempeño del Estado, a pesar de haber estado Netanyahu en el poder desde hace diez años, (más otros cuatro entre 1996 y el 2000, cuando derrotó al laborista Shimon Peres, ayudado por las consecuencias de una ola de terrorismo auspiciada por Hamas). De esta manera superó en el tiempo como Primer Ministro a uno de los creadores del Estado de Israel, Ben Gurion.

Sus seguidores lo suelen apodarar “Bibi, el Rey de Israel” o “el Mago”, pues lleva adelante una política activa en una región muy difícil, que incluye la utilización de la fuerza en Siria y el Líbano contra Hezbolá y los “proxies” iraníes, pero en una forma calibrada sin empeñarse en una guerra ilimitada, mientras mantiene un diálogo constructivo con países influyentes en la región, como es el caso de Rusia y Turquía, e incluso ampliando sus relaciones con varios Estados del Golfo, con Egipto y con Jordania. Además, se desempeña con éxito tanto frente a los problemas económicos como ante los geopolíticos, mientras sostiene una posición extrema ante Irán, que considera el mayor peligro para la seguridad israelí, mientras eludió avances en un posible acuerdo de paz comprensivo con los palestinos, y acentuó el desarrollo de los asentamientos y la presencia militar en la Margen Occidental. En síntesis, se considera el único gobernante capaz de defender eficazmente a Israel.

Para llegar a su decisión acusatoria, Mandelblit llevó adelante una investigación por casi tres años, donde entrevistó a testigos y reunió múltiples informaciones documentales, con ayuda de la policía para sustentar su posición de que existió corrupción. En el caso denominado 1000, lo imputa de fraude y abuso de derecho por haber recibido regalos por un valor de miles de shekels (la moneda israelí) de los multimillonarios Arnon Milchan y James Packer. En el caso 2000, por los mismos delitos, lo acusa de haber conspirado con el editor Arnon Mozes, del grupo periodístico Yedioth Ahronoth -el más importante de Israel-. Pero el caso más complicado para Netanyahu es el 4000, en el cual lo considera responsable de soborno, por haber otorgado beneficios por millones de shekels al magnate periodístico Shaul Elovich, a cambio de poner a su disposición el portal llamado Walla, y obtener una cobertura favorable de sus acciones en el Gobierno.

Este último delito es muy grave en el sistema jurídico israelí y tiene una pena de prisión severa, por lo cual Netanyahu podría encontrarse en la misma situación del ya condenado Exprimer ministro Ehud Olmert que se desempeñó hasta 2008, pero que fue juzgado después de haber dejado su cargo. A diferencia de otros países donde el sistema judicial es criticado por gran parte de la población, en Israel tiene gran prestigio y probada independencia,

tanto los jueces como los auxiliares de la justicia, y posee algunas características heredadas del británico, cuando Palestina fue un mandato de Londres desde 1920 hasta la creación del Estado judío en 1948. En muchas ocasiones, la Corte Suprema ha juzgado en contra de las posiciones jurídicas del Estado, incluso en casos referidos a las relaciones con los habitantes de origen palestino en Israel o en los territorios ocupados.

De inmediato Netanyahu se defendió, argumentando que existía una acción conspirativa de la izquierda y de las clases privilegiadas y que la estructura legal había prefabricado los casos en contra suya, en lo que significaba un intento de golpe en contra de su Gobierno utilizando pruebas falsas e investigaciones dudosas (¿Lawfaire?). Argumentó que sus intereses personales están con sus votantes, quienes son los únicos capaces de juzgar su desempeño, es decir la derecha, los ultraortodoxos, los que habitan los asentamientos y los judíos religiosos. Por esta razón sus aliados políticos han buscado, desde hace tiempo, que el Primer Ministro esté exceptuado de toda acusación por corrupción, mediante una ley expresa de la Knesset.

Sin embargo, aparecieron cuestionamientos a Netanyahu en el propio partido Likud, representados por el pedido aislado el 23 de septiembre de 2019 del exministro Gideon Saar, de que tengan lugar primarias en dicho Partido antes de que expiren los 21 días que posee la Knesset para endosar un nuevo candidato para el cargo de Primer Ministro, evitando la convocatoria de nuevas elecciones y superando la crisis política existente, mientras Netanyahu preferiría realizarlas después de vencido ese plazo y que la 22 Knesset está disuelta. Gideon Saar, de 53 años, fue Jefe de Gabinete de Ariel Sharon y luego titular de varias carteras ministeriales. Cabe señalar que su padre era médico y nacido en Argentina.

Mientras estos acontecimientos tenían lugar en Israel, el 18 de noviembre de 2019 el Secretario de Estado, Mike Pompeo declaró que los asentamientos israelíes no eran por sí inconsistentes con el Derecho Internacional, declaración que se unió a las

demostraciones del presidente Trump para fortalecer la posición de Netanyahu, como lo fueron su reconocimiento de Jerusalén como capital del país y la aceptación de su soberanía sobre los Altos del Golán, ocupados a Siria en 1967. Con esta declaración se deja de lado una posición constante de los Estados Unidos, sobre esta cuestión y el sentir de la comunidad internacional que, entre otras numerosas expresiones legales, estuvo representada por la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por 14 votos positivos y la abstención estadounidense (no el voto negativo) que, entre otros conceptos, reafirmó que dichos asentamientos son ilegales y una violación flagrante del Derecho Internacional.

